



O F I C I O

S/REF.: Expediente nº **00001-00076290**

FECHA: 21 de marzo de 2023

ASUNTO: Hackeo Encrochat

DESTINATARIO: [REDACTED]

El día 3 de febrero de 2023 tuvo entrada en esta Dirección General una solicitud de información efectuada por [REDACTED] a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

“ En relación a las investigaciones del hackeo de Encrochat y la participación del Ministerio del Interior de España a nivel de Europol en ese hackeo, me gustaría saber el detalle de dicha participación, en lo que se pueda saber por la Ley de Transparencia: personas que han intervenido, reuniones mantenidas en Europol, participación o no de la Policía española en equipos conjuntos de investigación (JIT) a nivel de Europol a este respecto, gastos para España de dicha participación, informes jurídicos de las consecuencias para los procedimientos penales españoles de dicho hackeo de Encrochat, número de operativos policiales que haya habido en España contra los distribuidores de dichos móviles, comunicaciones con la policía francesa a este respecto.

Solicito adicionalmente el nivel de conocimiento y participación directa del Ministro Marlasca en los procedimientos policiales y penales relacionados con dicho hackeo, cotejando su agenda y sus reuniones, visitas y llamadas oficiales, así como si ha habido por su parte alguna injerencia o consulta por su parte al respecto con sus compañeros en la Audiencia Nacional, en su condición de Magistrado Juez “latente” de dicho Tribunal de Justicia”.

Una vez analizada la presente solicitud, este Centro Directivo informa de que no se puede acceder a la información solicitada en base a los **artículos 14.1 e) y j)** de la Ley 19/2013, 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece que “*el derecho de acceso puede ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:*

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”

En relación a lo anterior, y en concreto sobre el Artículo **14.1. e)** en cuanto a las investigaciones llevadas a cabo por esta Institución, referir que el artículo **104.1 de la Constitución** establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, para cuyo cumplimiento deben actuar con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento, tal como recoge el mandato constitucional en su artículo 9.1 y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5.1.

La prevención de actos delictivos, la investigación de los ilícitos penales y la protección de las personas que se encuentren en situación de peligro, lleva a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al empleo de procedimientos, técnicas y protocolos de actuación donde se combinan medios humanos y materiales, que quedan plasmados en numerosos informes policiales que forman parte de la esfera de **información sensible y no pública** para el buen desempeño de las funciones encomendadas.

Estos informes policiales forman parte de procedimientos judiciales, motivo por el cual se considera que el acceso a su contenido constituiría un perjuicio para las funciones legalmente encomendadas de investigaciones y esclarecimiento de los hechos así como para la adecuada tramitación de los expedientes sancionadores.

Así mismo, según la **Ley orgánica 2/1986**, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su Artículo 5 que son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes:

*“(...) **5. Secreto profesional.** Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de Información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera”,* motivo por el cual es de aplicación igualmente el Artículo **14.1.j)** de la Ley de Transparencia mencionado inicialmente.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

LA SUBDIRECTORA GENERAL

Eulalia González Peña